

Con dientes y uñas



LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SE TRANSFORMÓ EN UNA
PARCELA DE PODER POLÍTICO.
UN LUGAR DONDE DARLES
PEGA A LOS AMIGOS.

LUIS LARRAÍN

Gritando a voz en cuello en las tribunas del Congreso Nacional, mientras los diputados piden cuentas al ministro de Educación Joaquín Lavín;

protestando frente a las puertas del ministerio en la Alameda. Así se defienden los funcionarios a contrata que han sido despedidos de esa repartición pública o no se les ha renovado el contrato. Se trata de 466 personas, menos del 10% del personal.

Exigen explicaciones, se sienten dueños de sus puestos. Pero la mayoría de ellos tiene poco que ver con la Educación chilena, con los niños o con las aulas. Hay en el ministerio ciento veinte abogados, según nos hemos enterado; más que en el estudio de abogados más grande de Chile. ¿Qué hacen allí? También sesenta periodistas, la dotación completa de un diario. ¿Se dedican a mejorar la calidad de la educación que reciben los chilenos?

La verdad es que son ellos los que tienen que dar explicaciones, ellos y quienes los contrataron pagándoles con la plata de todos los chilenos, para hacer no sabemos qué.

Bien por el ministro Lavín. La plata a la sala de clases, a los colegios y no a la burocracia que trabaja en el ministerio. Esa es la señal que requiere la Educación chilena: los recursos para mejorar la calidad, para la subvención educacional.

Es que la administración pública se transformó para algunos en una parcela de poder político. Un lugar donde darles pega a los amigos y a correligionarios. Por eso la reacción de los políticos de la Concertación, que hablan de despidos masivos y defienden a sus apitutados. Pero no hay tal. En total, en la administración pública son 1.373 los desvinculados y 1.255 las personas cuyos contratos no se renovaron; menos del 0,7% de la dotación.

Eso no es un despido masivo, es apenas una readequación de personal, lo mínimo que se espera para sacar la grasa en una administración pública que ha crecido entre 1990 y 2008 en un 64%, mientras el total de ocupados en la economía chilena crecía en un 49%.

En ese período, en que el valor de la producción ha crecido espectacularmente en Chile, más que se ha triplicado, el producto en Educación no ha mejorado. Y nadie se siente llamado a rendir cuentas por ello. Y paradójicamente el llamado a dar explicaciones es el que despide a funcionarios que no aportan nada.

A última hora trataron de cambiar las condiciones de los contratos en todo el sector público: normas de

amarre. Más de un 40% del personal de la administración pública, los que están en la planta, no pueden ser removidos si no es con un sumario (lo que es casi imposible). Pero el resto, personal a contrata, debe renovarse año a año.

Pues bien, el gobierno de la Presidenta Bachelet al prorrogar al personal a contrata a comienzos de este año intentó eliminar una norma que siempre ha existido y que dice que el contrato podía ser desahuciado si ya no son necesarios los servicios del trabajador. Y respecto del personal a honorarios, se incorporó una cláusula nueva exigiendo dar aviso con 60 días de anticipación si se quería poner término a los servicios. La Contraloría General de la República objetó ambas cláusulas y eso ha permitido que hasta la fecha se ponga término a los servicios de menos del 1% de la dotación. ¡Y ni eso quieren aceptar!

La Concertación se resiste. Es que perdió una batalla pero no la guerra. Siente que la administración pública sigue siendo una parcela propia, en la que se ha paseado por veinte años y no acepta que nadie se le meta ahí. A defender las pegas es la consigna. Denuncias ante la OIT, acusaciones constitucionales; defienden el botín.

El gobierno del Presidente Piñera no puede ceder. Su señal tiene que ser muy clara: el servicio público no es patrimonio de nadie, el que está allí tiene que responder a la ciudadanía, los funcionarios están para servir a la gente y el que no rinde debe irse. Es la única forma que tiene de cumplir con lo que ofreció al país.

Esto es más serio de lo que pudiera creerse; no se trata de las pegas de unos cuantos chilenos, se trata de saber si Piñera podrá gobernar, o si la captura del Estado por parte de la Concertación se lo impide. ■